



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

NOVIEMBRE 2022

El proceso constituyente entrampado

Pese a los avances registrados en la mesa de negociaciones para definir los bordes o principios en que debe enmarcarse el nuevo proceso constituyente y el acuerdo para establecer un mecanismo de arbitraje para velar por su cumplimiento, el acuerdo en torno al mecanismo ha entrampado la continuidad del proceso.

El oficialismo ha reiterado su propuesta de una nueva convención, integrada de manera paritaria, por 99 miembros, que incluye la representación de las etnias originarias, en tanto que la derecha insiste en una convención “minimalista” de no más de 50 miembros, elegidos de la misma forma como se elige el senado, sin descartar la participación de expertos como miembros incumbentes, con derecho a voz y voto. Los Amarillos han ido un poco más lejos, proponiendo que sea el parlamento el que designe una comisión que redacte una propuesta de nueva constitución, para ser sometida a un plebiscito ratificatorio. Una propuesta que ha recibido una calurosa acogida en sectores de la derecha, que no desean repetir la experiencia anterior, en donde quedarán reducidos a una minoría, sin derecho a veto.

La verdad, es que ningún sector político aspira a repetir la experiencia anterior, en donde los sectores políticos fueron superados por los independientes, neutrales y no neutrales, además de la sobre representación de las etnias originarias y movimientos identitarios, con propuestas claramente maximalistas.

La derecha ha entrado a esta nueva negociación con la calculadora en mano, buscando garantías y seguros para darle continuidad al proceso constituyente, desconfiando del resultado de una elección que pudiera favorecer a republicanos y el partido de la gente. Y aunque el oficialismo ha defendido el principio de nuevos convencionales íntegramente elegidos, difícilmente puede aspira a conquistar una mayoría, en el fragmentado escenario político que presenta el país. Sea que se elijan 99, 78, o 50 convencionales

Por su parte, el gobierno ha insistido en la necesidad de una convención íntegramente elegida, tal como lo ratificara el plebiscito de entrada del proceso constituyente, aprobado por el 80 de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, todo apunta a que se

deberá llegar a una solución de compromiso en torno a un mecanismo mixto, con la participación de “expertos” y miembros elegidos democráticamente, con una cifra intermedia ente la propuesta del oficialismo y la de la oposición.

En verdad, la posibilidad de contar con una nueva constitución redactada en democracia, sobre una hoja en blanco, por convencionales íntegramente elegidos, de manera paritaria y con representación de las etnias originarias, se frustró con el triunfo del rechazo en el plebiscito de salida. Las responsabilidades son compartidas.

Lo que hoy se propone es una nueva constitución negociada entre los sectores políticos con representación parlamentaria, en donde la derecha y los sectores que se aglutinaron en torno al rechazo, mantienen un poder de veto. Y como resulta evidente, la legitimidad democrática del nuevo proceso constituyente estaría dada por el plebiscito de salida que, hasta ahora, nadie discute.

Los plazos para arribar a un acuerdo se agotan y tiene a imponerse la idea que más vale un acuerdo de compromiso que permita culminar el proceso constituyente, que mantener latente este tema como una fuente de conflicto entre el oficialismo y la oposición. Lo más importante, es que el oficialismo pueda actuar unido para acordar una fórmula de compromiso con la oposición.

El deteriorado clima político que se vive en la cámara de diputados afecta la gobernabilidad del país

El clima de convivencia interna se ha venido degradando progresivamente, en medio de gruesas descalificaciones, agresiones físicas y verbales, parlamentarios en estado de supuesta intemperancia, faltas a la ética, con abuso de privilegios parlamentarios, desprecio a los reglamentos y propuestas abiertamente inconstitucionales, como quedara reflejado en la discusión presupuestaria.

Todo ello en el marco de un sostenido proceso de fragmentación de las bancadas parlamentarias, agudizado por la crisis de la DC y el propio proceso constituyente. Cerca de un 25 % de los diputados y diputadas se declara independiente, en tanto que otros renuncian a los partidos en los que fueron electos para formar nuevos referentes (como es el caso de los Amarillos y Demócratas), en tanto que otros sectores, como los evangélicos de derecha, el nuevo movimiento “transformar Chile”, liderado por el alcalde Jorge Sharp y algunos ex convencionales, por nombrar algunos, anuncian la formación de nuevos referentes.

A ello se suman importantes sectores de la derecha, refractarios a las reformas contenidas en el programa de gobierno y al propio proceso constituyente, no olvidan la dura oposición que hicieron los sectores de la izquierda al gobierno de Sebastián

Piñera y hoy ven una oportunidad, tras el triunfo del rechazo, de cobrar viejas cuentas y torcer el rumbo del gobierno.

La laboriosa operación montada por la derecha para vetar a Karol Cariola para presidir la cámara de diputados y elegir en su lugar a un representante de la oposición, sosteniendo que las mayorías habían cambiado tras el triunfo del rechazo, fracasó a última hora, luego que tres diputados del partido de la gente y cuatro diputados de la DC, votaran por el candidato del oficialismo, Vlado Mirosevic, pero la derecha no da su brazo a torcer. Ha ejercido una fuerte presión sobre los díscolos del partido de la gente y pone renovadas esperanzas en los parlamentarios disidentes de la DC, con el claro objetivo de defenestrar al nuevo presidente de la cámara antes del próximo período legislativo, como lo señalara el diputado Jorge Alessandri. Entre tanto ha procedido a impulsar mociones de censura a la presidencia de las comisiones en manos del oficialismo.

Es más que evidente que este clima de fuerte polarización y fragmentación que hoy se vive en la cámara de diputados no tan sólo dificulta el diálogo y la construcción de acuerdos, sino que conspira en contra de la gobernabilidad del país.

El país necesita de grandes acuerdos. No tan sólo para enfrentar el clima de violencia y el incremento de los delitos, señalado como un objetivo prioritario por el gobierno, que impulsa un acuerdo nacional sobre el tema, sino también para culminar el proceso constituyente y avanzar en un verdadero pacto social para retomar la senda del crecimiento y reactivación económica.

Ello no es posible sino se supera el clima de polarización y fragmentación política que vive el país, que bien se podría agudizar en los próximos tiempos de no mediar drásticas reformas del sistema político. Parece indispensable generar un diálogo entre sectores moderados, tanto de gobierno como de oposición, que aísle a los sectores más extremos y permita acuerdos en temas sustantivos de interés nacional. Entre otros el tema constitucional, la reforma tributaria y de pensiones, entre otros.

Una reforzada agenda gubernamental tras el cónclave oficialista

Naturalmente, el cónclave oficialista no resolvió los problemas y tensiones entre las dos coaliciones que apoyan al gobierno, pero se adoptó una fórmula de compromiso- dos coaliciones y una alianza de gobierno- que debiera permitir una mejor convivencia, restando espacios al llamado fuego amigo, que tanto daño hace al gobierno.

Lo más relevantes es que el gobierno asumió que debía incorporar a sus prioridades las llamadas urgencias ciudadanas en torno a tres ejes- seguridad pública, social y económica- que no siempre han estado en la primera línea de las prioridades del gobierno y menos de los partidos oficialistas.

El tema es como estas prioridades se traducen en acciones concretas. El gobierno ha llamado a un gran acuerdo en torno al tema de la seguridad pública, que debiera materializarse en una reforzada agenda, que no tan sólo incluye un reforzamiento y modernización de los servicios policiales, mejorar la inteligencia policial y un plan para enfrentar la delincuencia y el narco tráfico, sino también a nivel de la legislación.

Un tema controversial sigue siendo la controvertida ley anti terrorista, que tanto el gobierno como diversos sectores políticos encuentran que presenta múltiples problemas a la hora de su aplicación. Como es más que obvio, la oposición plantea que, si esto es así, el gobierno debería proponer su modificación, pero no puede inhibirse de aplicarla. El problema de fondo es que no existe consenso sobre el sentido de dichas modificaciones.

En materia de seguridad social los temas son más complejos de resolver. La crisis económica, agravada por la situación internacional ha golpeado con fuerza a los sectores más vulnerables y hoy vuelve a la palestra el controvertido tema de los retiros de los fondos previsionales como una fórmula de ayuda a estos sectores. El sexto retiro, que podría debatirse en el próximo mes de abril, a un año que fuera rechazado el quinto retiro, y que, sin duda, incomoda al gobierno y las autoridades económicas.

El ministro de hacienda ha anunciado que vienen meses duros antes que la situación empiece a mejorar. Y ello plantea el debate acerca de cómo el gobierno puede paliar la compleja situación que viven amplios sectores de la población, dadas las restricciones económicas y el proceso de ajuste que hoy vive la economía, sin descartar un nuevo IFE de invierno.

El tema de la educación aparece como otra área sensible para el gobierno. La senadora Yasna Provoste, ex ministra de educación, ha sostenido que el actual titular de la cartera tenía una agenda desacoplada de las urgencias que planteaba la educación. Muy probablemente se refería a la inquietante deserción escolar, que supera el millón de estudiantes durante los últimos años. A ello se agrega la brecha en materia de aprendizaje generadas por la pandemia y la educación a distancia. Y sin lugar a dudas, las manifestaciones violentas en algunos liceos emblemáticos de la capital.

Es más que evidente que estos temas deben marcar prioridades en la agenda del gobierno y el ministerio del ramo, que deben traducirse en mayores recursos y programas especiales para abordarlas en su integridad.

En el ámbito económico, finalmente el gobierno suscribirá la actualización del tratado de libre comercio con la Unión europea y depositará (promulgará) la ratificación del TPP11, aun cuando no todos los países han dado respuestas a las cartas laterales enviadas por el gobierno para revisar la resolución de conflictos como está prevista en el tratado.

Y aunque las cifras de inflación son algo más moderadas que las prevista por el mercado, todo apunta a que el país vivirá una recesión en los próximos meses, que obliga a las autoridades económicas a implementar políticas contra cíclicas y de mayor

impulso a la reactivación, con especial énfasis en la creación de empleos y defensa del poder adquisitivo de los chilenos, como se estableciera en el cónclave oficialista.

El tema migratorio

Lejos de decrecer, la inmigración ilegal en la frontera norte amenaza con recrudecer en los próximos meses, dada la compleja situación que se vive en diversos países de la región. Es muy difícil, por no decir imposible, intentar frenar el fenómeno con un mayor despliegue policial y de las FF.AA., que tan sólo pueden detener a los inmigrantes que cruzan las fronteras para ponerlos a disposición de los tribunales de justicia.

Todo indica que este complejo tema no es posible de resolver unilateralmente por cada uno de los países afectados con esta inmigración ilegal, sino en base a la cooperación internacional que, hasta ahora, ha sido más bien esquivada y escasa.

En especial, el caso de Bolivia, país con el cual están interrumpidas las relaciones diplomáticas, que permite el paso de inmigrantes ilegales hacia nuestro país y obviamente se niega a recibirlos de vuelta.

Sin embargo, al país vecino le preocupa el intenso contrabando en sus fronteras y ello abre un espacio para la búsqueda de mayor cooperación con nuestro país. En teoría, parece más factible perseguir el contrabando que detener la inmigración ilegal. Y ello podría ser la base de una cooperación de mutuo beneficio entre ambos países.

En la reciente visita del mandatario peruano a nuestro país, el tema migratorio estuvo en la agenda de las conversaciones, con avances para prevenir mayores flujos migratorios entre ambos países.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA
PDTE. JUAN ANTONIO RÍOS N° 58 – PISO 3 (26 33 99 79)